



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés

A23-233

ASUNTO: CONFLICTO DE COMPETENCIA
DEMANDANTE: ESTEFANÍA TABORDA PADIERNA
DEMANDADO: AGAVAL S.A.
RADICADO: 05001-41-05-003-2023-00447-01
DECISIÓN: ENTREGAR EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO AL JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a decidir el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Laboral Municipal de Pequeñas Causas de Medellín y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín.

El Magistrado del conocimiento, consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 32** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

Mediante auto del 10 de julio de 2023 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ LA FALTA DE COMPENECIA Y ORDENÓ el envío del expediente a los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales, toda vez que la cuantía no era superior a 20 SMLMV, por lo que la competencia para conocer del proceso radicaba en cabeza de los Juzgados aludidos, aun cuando existiera la competencia del reintegro la cual era meramente declarativa, pues existía pretensiones pecuniarias susceptibles de liquidar, por lo que el petitum debía ser estimado dinerariamente.

Por su parte, el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, por auto del 23 de agosto de 2023, propuso el conflicto negativo de competencia, señalando que al pretenderse el reintegro de la demandante, es un asunto que no está sometido a cuantía, por lo que debe acudir a lo dispuesto en el artículo 13 del C.P.T. y de la S.S. que señala que *“de los asuntos que no sean susceptibles de fijación de cuantía, conocerán en primera instancia los Jueces del Trabajo, salvo*

disposición expresa en contrario” y por tanto la competencia recaía en el Juez de Circuito para no vulnerar el derecho fundamental al debido proceso.

2. CONSIDERACIONES

El artículo 15, literal b, numeral 5° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social (CPTSS), modificado por el artículo 10 de la Ley 712 de 2001, prescribe que corresponde a las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre Juzgados del mismo Distrito Judicial.

Por medio del Acuerdo PSSAA11-8261 del 28 de junio de 2011, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se crearon los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales para que conocieran de los procesos laborales de única instancia¹, quedando así en el Distrito Judicial de Medellín los Juzgados Laborales de Circuito y los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales.

El artículo 12 del CPTSS, modificado por el artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, prescribe:

“Competencia por razón de la cuantía. Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás.
Donde no hay juez laboral de circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil.

Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existe, conocen un única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda el equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente.” (Resaltos de la Sala).

Y el artículo 20, numeral 2° del CPC, modificado por el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010, aplicable al procedimiento laboral por remisión expresa del artículo 145 del CPTSS, indica:

“ARTÍCULO 26. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA. La cuantía se determinará así:
1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación(...)”

No obstante lo anterior, el Código General del Proceso prevé en su artículo 139 el trámite que se debe impartir a los conflictos de competencia, estableciendo que siempre que un juez estime que no es el competente para conocer de un proceso deberá remitirlo a quien estima tenga la aptitud legal para conocer del mismo, norma que establece la **prohibición al inferior funcional de declinar la**

¹ **ARTÍCULO CUARTO.-** Los procesos en los que la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales, según lo preceptuado en los artículos 2° y 3° de la Ley 1395 de 2010 y 145 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, que durante la vigencia de la medida se presenten en el Distrito Judicial descongestionado, serán repartidos a los Juzgados de Pequeñas Causas aquí creados.

competencia cuando quien le remite el proceso es su superior, lo que precisamente ocurre en el caso objeto de estudio.

Y es que según lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 270 de 1996, la Administración de Justicia en Colombia tiene una estructura jerarquizada y es por ello siempre que se generen conflictos de competencia los mismos serán conocidos por el superior común de los enfrentados, luego cuando la decisión proviene del superior funcional el subordinado, se insiste, le está vedado abstenerse de conocer el mismo.

Incluso la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de tutela del 22 de mayo de 2013, radicación 43049, en relación con la estructura jerarquizada adujo que:

“Los Juzgados de Pequeñas Causas se instituyeron para coadyuvar a consolidar una justicia pronta, en aras de disminuir la congestión judicial y alcanzar una mayor eficacia y celeridad en la resolución de los litigios, según se extrae, incluso, de la Gaceta del Congreso 418 de 2006, que contiene la discusión inicial del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 1285 de 2009; esa Ley los incorporó, de manera genérica, a la estructura de la Rama Judicial.

En el párrafo 1° del artículo 40 ibídem, que modificó el 11 de la Ley 270 de 1996, se delimitaron claramente las competencias así: *“la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los Jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local (...) Los jueces de descongestión tendrán la competencia territorial y material específica que se les señale en el acto de su creación”* (subrayado fuera del original).

De ese modo, la esfera de atribuciones, en lo relativo a los juzgados de pequeñas causas, fue la municipal y local, en tanto, desde su origen, se establecieron para conocer de conflictos menores y se reforzó la necesidad de que realizaran un juicio sumario.

Fue así como la Ley 1395 de 2010, en su artículo 46, que modificó el 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, adjudicó a aquellos, en la jurisdicción del trabajo, el trámite de asuntos *“en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente al veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente”*.

Esa asignación implicó que, por su naturaleza, las decisiones emanadas en los procesos ordinarios, no fueran susceptibles de apelación, conforme la exclusión que hace el precepto 66 del Estatuto Instrumental, es decir, que fueran despachos municipales, exclusivos para asuntos de única instancia.

Tal regla jurídico procesal no se aplica sin embargo para el adelantamiento de acciones constitucionales, pues conforme, entre otros, al Acuerdo N° PSAA12-9617 de 25 de julio de 2012, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deben conocer de ellas, *“sin interesar su carácter transitorio o permanente”*, y siguen lo dispuesto en el inciso 3° del Decreto 1382 de 2000, esto es, asumen las tutelas que *“se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares”*, y la impugnación corresponde a los Jueces Laborales del Circuito, por tratarse de su superior exclusivo para esa materia.”

También la Corte Constitucional a través de sentencia C-424 de 2015, al analizar la exequibilidad del artículo 69 del CPT y SS, en caso similar al de autos, precisó que debe entenderse como superior

funcional de los jueces municipales de pequeñas causas laborales a los jueces laborales del circuito, al indicar que:

“Constatada la vulneración del derecho a la igualdad y la disminución de las garantías procesales, la disposición acusada es exequible en el entendido que también serán consultadas ante superior funcional, las sentencias de única instancia totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario. Dicha remisión se efectuará así: (i) si la sentencia desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez laboral o civil del circuito-en los lugares donde no hay laboral- en primera o única instancia, dicho funcionario deberá enviar el proceso a la respectiva Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial para que se surta el grado de consulta y; (ii) cuando el fallo sea proferido en única instancia por los jueces municipales de pequeñas causas será remitido al juez laboral del circuito o al civil del circuito a falta del primero. Sin que el condicionamiento habilite a las partes a interponer los recursos propios de una sentencia de primer grado o el recurso extraordinario de casación.”

Así las cosas, tal y como se indicó, en principio pareciese que no existen presupuestos para suscitar una colisión de competencia, en razón de que el Juzgado Laboral del Circuito de Medellín resulta ser el superior funcional del Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales, no pudiendo este último como consecuencia de dicha superioridad declararse impedido, toda vez que para que el conflicto pueda existir, es inexorable que los funcionarios no sean directamente subordinados.

No obstante lo anterior, la Sala NO se abstendrá de decidir y por el contrario ordenará la remisión del expediente al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín para que continúe con el trámite del proceso por las siguientes razones:

En primer lugar, el referido despacho judicial hizo un análisis sesgado de las pretensiones de la demanda, pues únicamente tuvo en consideración las pretensiones consecuenciales de condena, sin detenerse a analizar la pretensión principal eminentemente declarativa, misma que se encuadra en los postulados del artículo 13 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que alude a los asuntos que no sean susceptibles de fijación de la cuantía, los cuales deben ser conocidos en primera instancia por los Jueces Laborales del Circuito:

“(...) ARTICULO 13. COMPETENCIA EN ASUNTOS SIN CUANTIA. De los asuntos que **no sean susceptibles de fijación de cuantía, conocerán en primera instancia los Jueces del Trabajo, <Jueces Laborales del Circuito>** salvo disposición expresa en contrario.

En los lugares en donde no funcionen Juzgados ~~del Trabajo~~ <Laborales del Circuito>, conocerán de estos asuntos, en primera instancia, los Jueces del Circuito en lo Civil (...)” (Resaltos fuera de texto).

Ahora, si bien en la norma en comento, no estableció en forma expresa los asuntos no susceptibles de cuantía, estos se refieren a aquellos que versan fundamentalmente sobre PRETENSIONES DECLARATIVAS a las que no es posible atribuirles valor, como ocurre en el presente asunto, donde las pretensiones principales son eminentemente declarativas:

PRIMERA. Que se declare que entre la señora **ESTEFANIA TABORDA PADIerna** identificada con la C.C. No. 1035235699 y la Empresa **AGAVAL S.A NIT. 890903995-8**, existió un Contrato de Trabajo, en el lapso comprendido entre el 07 de Agosto de 2021 hasta el día 23 de Febrero de 2023, cuando la trabajadora fue despedida sin justa causa, estando en estado de embarazo y sin ninguna autorización del Ministerio del Trabajo

SEGUNDA. Consecuencialmente con la declaración anterior dispondrá **LA NULIDAD DEL DESPIDO** y el respectivo reintegro de la trabajadora **ESTEFANIA TABORDA PADIerna**, al cargo desempeñado al momento del despido (ASESORA DE VENTAS) y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, con los respectivos aumentos legales, sin solución de continuidad entre la fecha del despido y la del reintegro efectivo.

Por tanto, si bien existe una pretensión consecuencial consistente en el pago de una indemnización establecida en el artículo 3 del artículo 239 del CST, esta no puede ser la que determine la competencia del proceso ordinario laboral de la referencia, como equivocadamente lo consideró el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, toda vez que esta pretensión de condena depende de otras pretensiones declarativas que por su propia naturaleza no eran cuantificables como lo es la declaratoria de la relación laboral, que la trabajadora fue despedida en estado de embarazo sin previa autorización del Ministerio de Trabajo, la nulidad del despido y el respectivo reintegro al cargo que venía desempeñando.

Considerar lo contrario o abstraernos de tal realidad y simplemente señalar que no es dable para el Juzgado de inferior categoría declararse impedido, podría no sólo conllevar una vulneración al derecho fundamental al debido proceso que debe regir cualquier actuación judicial, claro está, con las consecuencias que ello puede acarrear, sino además pretermitir una instancia llamada a surtirse por la naturaleza del asunto.

Conforme los razonamientos que preceden, esta Magistratura entregará el conocimiento del asunto al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín para que continúe con el trámite del mismo.

DECISIÓN

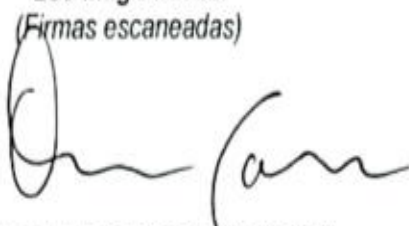
En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA TERCERA LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **RESUELVE:**

PRIMERO: ENTREGARLE el conocimiento del proceso ordinario laboral instaurado por **ESTEFANIA TABORDA PADIerna** contra **AGAVAL S.A.**, al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín para que continúe con el trámite pertinente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.


SEGUNDO- Notificar la presente decisión al Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín.

TERCERO. Lo resuelto se notificará por ESTADOS.


Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por ESTADOS No. 164 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Secretario